

Nuevos movimientos sociales en tiempos de conservadurismo y austeridad: análisis del proceso político de movilización educativa en las Islas Baleares (2013-2015)

Lluís Parcerisa

UNIVERSITAT DE BARCELONA

lluiparcerisa@ub.edu

ORCID: 0000-0002-6755-1988

Antoni Verger

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Antoni.Verger@uab.cat

ORCID: 0000-0003-3255-7703

Recibido: 23/08/2021

Aceptado: 30/03/2022

RESUMEN

Durante la legislatura autonómica 2011-2015, el sector educativo de las Islas Baleares se vio inmerso en un profundo proceso de transformación educativa que combinó la aplicación de unas estrictas políticas de austeridad con un ambicioso plan de reforma del modelo lingüístico. Como resultado de estas reformas surgieron nuevos actores colectivos y redes de acción colectiva, y estalló un conflicto sin precedentes en el campo educativo balear, que culminó con la convocatoria de un paro indefinido. Esta investigación tiene como objetivo analizar la trayectoria de la movilización social contra estas reformas educativas y las razones que explican su éxito. A nivel teórico, la investigación se basa en el enfoque de proceso político, que integra factores estructurales e *ideacionales*. Metodológicamente, el estudio de caso se basa en el método de *process-tracing*, y en el análisis de 20 entrevistas semiestructuradas con actores clave y de documentos. Los hallazgos muestran que la construcción de puentes entre diferentes marcos de significado, junto con la combinación de repertorios de acción colectiva de distinta naturaleza, explican en gran medida el éxito del movimiento social analizado.

Palabras clave: reforma educativa; marcos de interpretación; movimiento social; repertorio de acción colectiva; estructura de oportunidades políticas.

ABSTRACT. *New Social Movements in Times of Conservatism and Austerity: Analysis of the political process of educational mobilization in The Balearic Islands (2013-2015)*

During the 2011-2015 legislature, the education sector in The Balearic Islands was shaken by root-and-branch proposals for educational reform that combined draconian austerity policies and an ambitious reform plan that questioned the existing linguistic model. Efforts to push through these reforms led to the emergence of new collective actors and networks, and disputes that culminated in the calling of an indefinite strike in the education sector. This paper analyses the trajectory of and reasons for the success of the social mobilisation against said reforms. At the theoretical level, the research is guided by the political process approach, which considers the ideas and structural factors driving collective action. Methodologically, the case study follows the process-tracing method and is based on 20 semi-structured interviews with key actors and on document analysis. The findings show that frame-bridging, together with the combination of diverse collective action repertoires, played key roles in the social movement's success.

Keywords: education reform; collective action frames; social movement; repertoires of collective action; structure of political opportunities.

SUMARIO

Introducción
Reforma educativa y movilización social en las Islas Baleares
El surgimiento de un nuevo actor colectivo: la Asamblea de Docentes
Gobernar la educación con mano de hierro
La gota que colma el vaso: el decretazo como catalizador de la protesta social
Desenlace: escenificación de la pacificación del conflicto y cambio de gobierno
Discusión y conclusiones
Referencias bibliográficas
Webgrafía
Nota biográfica

Autor para correspondencia / Corresponding author: Lluís Parcerisa. Universitat de Barcelona, Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Edifici Llevant: paseo de la Vall d'Hebron, 171, 08035, Barcelona.

Sugerencia de cita / Suggested citation: Parcerisa, L., y Verger, A. (2023). Nuevos movimientos sociales en tiempos de conservadurismo y austeridad: análisis del proceso político de movilización educativa en las Islas Baleares (2013-2015). *Debats. Revista de cultura, poder y sociedad*, 137(2), 29-40. DOI: <http://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.2>

INTRODUCCIÓN

Después del estallido de la crisis económica de 2008, emergieron nuevos movimientos sociales para hacer frente a las políticas de austeridad y privatización que se aplicaron en ámbitos como la educación y la salud. Entre los años 2013 y 2015, las Islas Baleares experimentaron uno de los periodos de movilización social más intensos de las últimas décadas. En esta comunidad autónoma se desencadenó una intensa movilización social de repulsa a los recortes y a la política lingüística del gobierno del Partido Popular.¹ Dicha movilización cristalizó en numerosos repertorios de acción, entre los que destacó la convocatoria de una huelga indefinida en el sector educativo, seguida de una movilización social masiva sin precedentes. La movilización social generó la emergencia de nuevos

sujetos políticos e importantes cambios a nivel procedimental y político. Contribuyó también al desgaste del gobierno del Partido Popular balear, que sufrió una debacle electoral en las elecciones autonómicas de 2015.

El presente estudio tiene por objetivo analizar en profundidad la movilización social contra las políticas educativas conservadoras en las Islas Baleares en el periodo 2013-2015. Se trata de un caso de lo más ilustrativo para entender las claves de la emergencia e impacto de los movimientos sociales en el ámbito de las políticas públicas. A nivel teórico, la investigación se basa en el enfoque del proceso político (Della Porta y Diani, 2011; McAdam, McCarthy, y Zald, 1999; Tarrow, 2012), que integra elementos de naturaleza estructural, como el contexto y la estructura de oportunidades políticas (Hay, 2002; Tarrow, 2012) y factores *ideacionales* y discursivos, como los marcos de acción colectiva (Snow y Benford, 2000).

¹ Por ejemplo, Pastor (2010) señala que, en términos ideológicos, el Partido Popular combina principios neoliberales y neoconservadores.

Metodológicamente, el estudio de caso se basa en 20 entrevistas semiestructuradas con actores clave que incluyen altos cargos de la Consejería de Educación y de los principales partidos políticos de la oposición, inspectores de Educación, sindicatos de docentes y de estudiantes, miembros de la Asociación de Directores/as de Educación Secundaria de Mallorca, federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, dirigentes de *lobbies* y entidades culturales, decanos y docentes de la Universidad de las Islas Baleares, movimientos sociales como la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP), la Plataforma Crida y la Asamblea de Docentes. La selección de los participantes incluidos en la muestra fue intencional (Patton, 2002). El análisis siguió un proceso iterativo en el cual se combinaron códigos preestablecidos y emergentes. Complementariamente, se realizó un análisis documental de comunicados, notas de prensa y noticias publicadas en prensa. El estudio de caso se basa en el método del *process-tracing* (Beach y Pedersen, 2013), que nos facilitó la sistematización e identificación de actores, etapas y sucesos clave de la reforma, así como el análisis de la relación entre dichos elementos.

Los hallazgos ponen de relieve que el establecimiento de puentes entre marcos discursivos y la adopción de nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, junto con la combinación de repertorios innovadores y disruptivos, son elementos clave para comprender el éxito de la movilización social analizada. A continuación, se presentan los principales resultados del estudio, que estructuramos basándonos en las diferentes etapas del conflicto.

REFORMA EDUCATIVA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LAS ISLAS BALEARES

El surgimiento de la movilización educativa en las Islas Baleares estuvo marcado por un contexto de reforma convulso, en el cual se combinaron políticas de austeridad y un ambicioso plan de reforma de la política lingüística en educación. Durante los primeros años de la década del 2010, las políticas de austeridad del

Gobierno central condicionaron de forma directa la política educativa de los gobiernos autonómicos. El Decreto ley de medidas para reducir el déficit público (Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio) se tradujo en un aumento de la jornada laboral docente, la precarización del personal interino y un aumento de las ratios. El Gobierno balear no solo acató dichas prerrogativas, sino que las amplió. Como consecuencia de ello, las Islas Baleares fue una de las comunidades autónomas con una de las políticas de austeridad más severas en educación.

El gobierno conservador de Bauzá se caracterizó, además, por romper claramente con el perfil regionalista del Partido Popular balear, apostando por impulsar el trilingüismo en educación a través del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). Mediante dicho decreto, que implicaba de facto una menor presencia de la lengua catalana en las aulas, la política lingüística del Gobierno balear se alineaba con el ideario del ministro de Educación del Gobierno español, José Ignacio Wert (Melià, 2014) y con los principios de la reforma educativa estatal de la Ley orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Según algunos representantes de movimientos sociales en defensa de la educación pública, la figura del presidente José Ramón Bauzá resulta clave para comprender la agenda de reforma del gobierno autonómico y el tipo de relaciones que se establecen entre gobierno y sociedad civil. A raíz de su proyección política a escala estatal, y de su búsqueda de aceptación por parte del Gobierno central, el presidente Bauzá no dudó en «profundizar en las políticas de austeridad» y en intentar poner de manifiesto «la debilidad del catalanismo» en las Islas Baleares (entrevista expuni10, 21 de abril de 2015).

El surgimiento de un nuevo actor colectivo: la Asamblea de Docentes

Ante la inminente aprobación del Decreto TIL, durante el mes de marzo del año 2013 tuvieron lugar múltiples movilizaciones sectoriales que denunciaban la política lingüística del Gobierno balear (Ste-i, 09/03/2013) y las políticas de ajuste estructural. A finales de ese mes, nace un nuevo actor colectivo, la Asamblea de Docentes. Esta se constituye en una asamblea en la que

participaron alrededor de 50 portavoces de diferentes escuelas (Guerrero, 2015). Según varios activistas, entre los asistentes había docentes afiliados a sindicatos y partidos, miembros de movimientos de renovación pedagógica y un grupo de docentes sin experiencia militante previa que decidió vincularse a la Asamblea de Docentes porque tenía la necesidad de expresar su malestar (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015; entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015).

En el otro lado del conflicto, Círculo Balear presionó al Gobierno, a través de los medios de comunicación, para forzar el cese del consejero Bosch, al que señalaban como responsable de aplazar el TIL y de no permitir la libre elección de lengua (Guerrero, 2015). En palabras de un dirigente de Círculo Balear, el consejero Bosch «era muy reticente a aplicar este decreto de trilingüismo» (entrevista lidlob08, 20 de abril de 2015). El consejero Bosch habría favorecido la introducción del artículo 20 en el Decreto TIL, con el que se remarcaba la autonomía de los centros a la hora de aplicar el programa trilingüe y, por lo tanto, se facilitaba que pudieran aprobar e implementar un proyecto lingüístico alternativo (entrevista platfap14, 22 de abril de 2015; entrevista asinsp15, 22 de abril de 2015). Según un alto cargo de la Consejería de Educación, las presiones del *lobby* conservador surtieron efecto y lograron precipitar la destitución del consejero (entrevista exconsejed22, 21 de abril de 2014).

Gobernar la educación con mano de hierro

El cambio en la Consejería de Educación supuso el inicio de un nuevo periodo político de todavía mayor tensión y conflictividad. A diferencia de Bosch, que contaba con una dilatada trayectoria en educación, la nueva consejera, Joana Maria Camps, provenía de la Dirección General de Trabajo y contaba con experiencia en el sector inmobiliario. Según un miembro de la asociación de inspectores, la nueva consejera fue elegida para garantizar la aplicación del Decreto TIL (entrevista asinsp16, 22 de abril de 2015).

La mayoría de los centros, en el marco del consejo escolar, decidieron acogerse al artículo 20 para no aplicar el TIL de forma íntegra (Guerrero, 2015). Como

respuesta, el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, dictó unas instrucciones que instaban a los directores a repartir las horas lectivas de manera equilibrada entre las dos lenguas oficiales (entrevista asdir18, 23 de abril de 2015) y a elaborar un proyecto lingüístico de centro, en caso de que el centro no contara con uno (Guerrero, 2015). Con la primera instrucción se estaba «dictando una norma que intenta modificar otra norma de rango superior, que es un decreto» (entrevista asdir18, 23 de abril de 2015), mientras que con la segunda instrucción se vulneraba la LOE (Ley orgánica de Educación), que establece que los responsables de la aprobación de los proyectos lingüísticos son los consejos escolares. Ante ello, la Asociación de Directores/as de Educación Secundaria de Mallorca y el sindicato docente STEI-i interponen un recurso de altura contra las instrucciones del secretario Estarellas. Los sindicatos docentes (STEI-i, FE-CCOO y FETE-UGT) también presentarían recursos contenciosos con el objetivo de paralizar y/o aplazar la aplicación del decreto (Guerrero, 2015: 54).

Ante esta coyuntura, la Asamblea de Docentes decide promover asambleas en los centros educativos. En algunos casos, estas asambleas se benefician de las dinámicas y espacios establecidos por la Plataforma Crida. Debido a la escalada del conflicto, había empezado a circular la propuesta de una huelga indefinida (entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015), que se acordaría en la asamblea del 4 de junio de 2013 (Guerrero, 2015). Sin embargo, como señala un activista, esta no contó de inmediato con el apoyo de los sindicatos docentes (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015; entrevista lidsindicato20, 24 de abril de 2015). La decisión de ir a la huelga indefinida es fruto de la acumulación de malestar y frustración entre el personal docente. El malestar se explica por los recortes presupuestarios, el empeoramiento de las condiciones laborales, la política lingüística y la represión del Gobierno, mientras que la frustración se debía a que, después de dos años de movilización, no se había logrado mover al Gobierno de su posición. Ante tal escenario, los docentes percibían que algunas acciones colectivas, como las huelgas de un día, eran poco eficaces para presionar al Gobierno.

En consecuencia, los activistas eran partidarios de adoptar repertorios de acción colectiva más radicales y de recuperar repertorios de acción colectiva que tradicionalmente había utilizado el movimiento obrero (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015).

A partir de ese momento, miembros de la Asamblea empezaron a investigar y a informarse de experiencias de otras huelgas indefinidas. Tal y como señala uno de los activistas, se formularon preguntas como: «¿Qué hacía el movimiento obrero en los años setenta y ochenta? ¿Y los maestros? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo eran sus huelgas?». Concretamente, se inspiraron en las huelgas del puerto de Barcelona durante la década de los setenta, las huelgas de los profesores interinos de 1977, las huelgas de profesores de 1980 y, especialmente, la huelga docente de 1988. Asimismo, también conversaron con antiguos líderes sindicales con experiencia en este tipo de acciones. En sus relatos pudieron identificar dos elementos clave para explicar el éxito de movilizaciones anteriores: el contacto y la proximidad con la gente de base (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015).

Sin embargo, en un primer momento, las direcciones de los sindicatos docentes no se mostraron favorables a la propuesta de huelga indefinida. Según un dirigente del sindicato STEI-i, basándose en su experiencia, algunos de sus afiliados consideraban que lo más conveniente era convocar una huelga por días sostenida en el tiempo, ya que les permitiría administrar la respuesta y, al mismo tiempo, evitaría que se agotaran las fuerzas y que la movilización se deshinchara (entrevista lidsindicato04, 20 de abril de 2015; entrevista lidsindicato05, 20 de abril de 2015). Su tesis era que una huelga indefinida no sería sostenible en el tiempo y dificultaría la resolución del conflicto (entrevista lidsindicato05, 20 de abril de 2015). Estas preocupaciones eran compartidas por FE-CCOO (entrevista lidsindicato19, 23 de abril de 2015) y la FETE-UGT. Estos últimos hicieron consultas internas telemáticamente y percibieron poco apoyo social a la huelga indefinida (entrevista lidsindicato20, 24 de abril de 2015).

En general, los sindicatos creían que, para llevar a cabo una huelga, se necesitaba hacer más pedagogía entre la comunidad educativa, para que la gente entendiera y fuera consciente de lo que esta implicaba. Ir a una huelga indefinida no podía ser fruto de una decisión espontánea (entrevista lidsindicato05, 20 de abril de 2015). Por estas razones, inicialmente, los sindicatos no respaldaron la huelga indefinida y pospusieron la decisión para acordarla en una asamblea de afiliados a principios de septiembre. Como señala un representante sindical entrevistado, los sindicatos no tuvieron suficientemente en cuenta el potencial simbólico y emocional de la movilización social del momento (entrevista lidsindicato19, 23 de abril de 2015).

Los activistas de la Asamblea de Docentes, en cambio, consideraban que tenían que trabajar para crear las circunstancias que posibilitaran que la huelga fuera secundada masivamente. Para ello, empezaron a realizar encuestas en los centros educativos para evaluar las garantías de éxito de la huelga indefinida. Tras evaluar los resultados, el pronóstico fue positivo (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015). De hecho, para la Asamblea, la convocatoria de la huelga debería tener efectos performativos y ejercer de marco motivacional para la acción (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015).

Tomada la decisión de ir a la huelga indefinida, era preciso resolver algunos aspectos legales. Por ejemplo, para constituir el comité de huelga, era necesario lograr 4.000 firmas de docentes en activo, que representa el 40 % de los docentes que trabajan en el sector público (Guerrero, 2015). La Asamblea de Docentes recibió apoyo jurídico de sindicatos alternativos, como la Coordinadora Obrera Sindical (COS) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015).

Otro elemento clave fue la creación de una caja de resistencia, concebida como un «componente económico y de solidaridad» para hacer viable la huelga indefinida (entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015). Inicialmente, la caja de resistencia tenía un triple objetivo: sufragar los gastos de propaganda para la

movilización social, sufragar los costes económicos de la represión (multas, etc.) y generar un movimiento de solidaridad. Finalmente, gracias al éxito de la iniciativa, también pudieron sufragar parte de las pérdidas económicas de los docentes en huelga (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015). Las alianzas con entidades sociales como la Obra Cultural Balear tuvieron un rol importante en la creación de la caja de resistencia, ya que facilitaron su infraestructura económico-legal a los docentes en lucha (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015; entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015; entrevista replatcult09, 25 de abril de 2015). Para anunciar la decisión de ir a la huelga indefinida, la Asamblea de Docentes acordó celebrar un acto multitudinario en el Teatro de Manacor el día 26 de junio. Este acto contó con la participación de alrededor de 300 personas y tuvo un importante impacto mediático. En este sentido, en términos comunicativos, la Asamblea de Docentes se caracterizó por llevar a cabo un uso intensivo de las redes sociales, lo cual fue muy relevante tanto a nivel interno como para proyectar, frente a la opinión pública, su poder movilizador y sus principales demandas (entrevista expuni10, 21 de abril de 2015).

A mediados de julio, las direcciones recibieron los informes negativos de los proyectos lingüísticos, junto con un informe elaborado por la Inspección de Educación y unas instrucciones del secretario autonómico de Educación, que concedían cinco días a los centros para modificar los proyectos lingüísticos (entrevista asdir18, 23 de abril de 2015; Guerrero, 2015). No obstante, los consejos escolares y los claustros rechazaron la propuesta de modificación de la Consejería de Educación (entrevista asdir18, 23 de abril de 2015). La mayoría de las escuelas (59 %) e institutos (91 %) se encontraban en dicha situación (Guerrero, 2015) y algunos de ellos decidieron desobedecer a la Consejería y no elaborar el proyecto lingüístico (entrevista platcrid13, 22 de abril de 2015).

En ese periodo, las direcciones están sometidas a una gran presión e incluso a sanciones, hasta el punto de que algunas deciden dimitir (Guerrero, 2015; entrevista asdir18, 23 de abril de 2015). Los expedientes a los

directores no hicieron más que aumentar el malestar entre la comunidad educativa y favorecieron que la huelga indefinida ganara todavía más adhesiones entre los docentes.

A principios de agosto, la Asamblea de Docentes solicita formalmente una reunión con la Consejería de Educación, para iniciar un proceso de negociación sobre su mesa de reivindicaciones (véase Tabla 2). Los tres pilares de la mesa reivindicativa eran los recortes, la lengua y libertad de expresión, y la derogación de la LOMCE (entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015).

La mesa de reivindicaciones suscitó intensos debates en la Asamblea de Docentes. Algunos activistas eran partidarios de acotar las reivindicaciones y centrarse en pocos puntos (de naturaleza social o lingüística) que fueran realistas y asumibles. Sin embargo, la mayoría de los y las docentes optó por construir una mesa amplia e inclusiva, que discursivamente les permitiera canalizar una gran parte del malestar social latente en la sociedad (entrevista acasdoc01, 23 de abril de 2015; entrevista acasdoc02, 23 de abril de 2015; entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015).

A pesar de las múltiples expresiones de malestar y de la existencia de un gran número de protestas sectoriales, ningún movimiento social había sido capaz de aglutinar las diferentes luchas sectoriales en contra de la política del Gobierno balear hasta ese momento. Con la elaboración de un conjunto de reivindicaciones amplias, la Asamblea de Docentes quería convertirse en un catalizador y aglutinador de la movilización social (entrevista expuni10, 21 de abril de 2015). La decisión de establecer puentes entre marcos de significado (o *frame bridging*, véase Snow, Rochford Jr., Worden, y Benford, 1986) permitió agregar las múltiples reivindicaciones y motivos de malestar presentes en la sociedad, y resultó clave para entender la gran capacidad de movilización social de la Asamblea.

Entre finales de agosto y principios de septiembre se vuelven a celebrar actos y asambleas multitudinarias, y docentes de Menorca e Ibiza deciden secundar la huelga indefinida también (Guerrero, 2015). Paralelamente,

los sindicatos exploran las vías de la negociación con la Consejería. Una reunión celebrada entre ambas partes el 2 de septiembre termina sin acuerdo, por lo que el sindicato STEI-i decide ir a la huelga indefinida (Guerrero, 2015).

La gota que colma el vaso: el decretazo como catalizador de la protesta social

Se acercaba el inicio del curso 2013-2014 y la actividad política era frenética, con dos convocatorias de huelga indefinida registradas simultáneamente. El día 3 de septiembre, los sindicatos STEI-i y CCOO registran la primera convocatoria, que prevé iniciarse el 13 de septiembre. Pese a compartir las reivindicaciones, los otros sindicatos del sector, UGT y ANPE, no se sumaron a la convocatoria de paro indefinido (*Diario de Mallorca*, 04/09/2013). Los sindicatos convocantes tomaron la decisión estratégica de ampliar la convocatoria de paro indefinido al sector privado-concertado, para aumentar la presión sobre el Gobierno (entrevista lidsindicato07, 22 de abril de 2015). Dos días más tarde, la Asamblea de Docentes formalizaría su convocatoria de paro indefinido a partir del 16 de septiembre (*Es Diari*, 05/09/2013).

La acción de los sindicatos en el frente jurídico-legal contra las normativas promulgadas por el Gobierno avanzaba en paralelo y resultó especialmente eficaz en el caso del TIL. Los recursos contenciosos presentados por los sindicatos surtieron efecto y el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) decidió ejecutar la suspensión cautelar del Decreto TIL, a causa de los errores formales hallados en el proceso de aprobación de las instrucciones de aplicación del mismo. Del mismo modo, también se suspendieron las instrucciones elaboradas por el secretario autonómico de Educación.

Ante esta situación, el Gobierno balear decidió responder con la aprobación de un decreto ley que obligaba a los centros a aplicar el Decreto TIL, evitando así el cumplimiento de la suspensión cautelar ordenada por el TSJIB (Guerrero, 2015). Según varios entrevistados, la aprobación de este último decreto ley actuó como un detonante todavía mayor del malestar social

acumulado desde el inicio de la legislatura, y desató una ola de solidaridad y apoyo social a los docentes. También sumó a un buen número de docentes que todavía estaban indecisos al paro indefinido (entrevista asdir18, 23 de abril de 2015; entrevista lidsindicato07, 22 de abril de 2015).

Cuatro días antes de la huelga, el día 12 de septiembre, se agotan todas las opciones para evitar el paro docente, y el diálogo social llevado a cabo en la Mesa Sectorial de Educación se rompe definitivamente. Poco después, las asociaciones de padres y madres de alumnos manifiestan su apoyo a la lucha de los docentes. Empieza un curso insólito, marcado por la inminencia de la huelga indefinida. Durante tres semanas (del 16 de septiembre hasta el 7 de octubre), las escuelas paralizan completamente su actividad académica y experimentan una actividad política frenética, organizando acciones reivindicativas y realizando asambleas diariamente. A lo largo de esas semanas, se suceden varias concentraciones multitudinarias (Guerrero, 2015). El paro empezó con un 90 % de seguimiento en la primera jornada, y fue ampliamente secundado hasta el final (entrevista lidsindicato07, 22 de abril de 2015). Para evitar que surgiera el conocido como problema del *free-rider* (véase Moore, 1995), los activistas buscaron estrategias para crear incentivos que facilitaran la adhesión de aquellos docentes que se mostraban más dubitativos o menos motivados para participar en la acción colectiva (entrevista acasdoc02, 23 de abril de 2015).

Las alianzas entre movimientos sociales son clave para maximizar el impacto de la acción colectiva y promover el cambio social (Beamish y Luebbers, 2009). En el caso de la huelga indefinida, las alianzas que se tejieron entre organizaciones docentes y otros actores colectivos como organizaciones estudiantiles y asociaciones de madres y padres de alumnos fueron clave para poder sostenerla en el tiempo y reducir sus costos para los participantes. En un contexto de paro docente indefinido, es habitual que los intereses de las familias y del profesorado no coincidan (véase Narodowski, Moschetti, y Alegre, 2016). Sin embargo, en el caso del conflicto educativo en las Islas Baleares, la

falta de diálogo y las políticas de recortes del gobierno conservador contribuyeron a que las familias organizaran una campaña de apoyo a los maestros en huelga, bajo el nombre de Aulas Vacías. Con esta campaña se promovía no llevar al alumnado a la escuela para permitir que los docentes pudieran mantener el paro indefinido (Guerrero, 2015; entrevista platfap14, 22 de abril de 2015). Asimismo, el apoyo de personalidades públicas y artistas de renombre a la caja de resistencia fue notable. Alrededor de esta se generó un movimiento de solidaridad arrollador (entrevista asinsp15, 22 de abril de 2015; entrevista asdir18, 23 de abril de 2015; entrevista acasdoc01; entrevista acasdoc03, 24 de abril de 2015) que traspasó las fronteras administrativas autonómicas, expandiéndose rápidamente a otras comunidades autónomas (entrevista replatcult09, 25 de abril de 2015).

El auge de la protesta social y el éxito de la huelga indefinida tensionaron fuertemente al partido conservador, que experimentó divisiones internas. Los alcaldes de la *Part Forana*,² pertenecientes al sector regionalista-conservador del PP, se desmarcaron de la política lingüística del partido. En numerosos ayuntamientos se aprobaron mociones simbólicas de rechazo a la reforma educativa, a menudo con el apoyo y/o la abstención de los alcaldes y ediles del partido conservador. Estas divisiones internas también trascendieron a los medios de comunicación, donde algunos miembros del partido conservador emitieron declaraciones para presionar al Gobierno a negociar con los docentes. A pesar de las reticencias iniciales de la Consejería de Educación a entablar negociaciones con los comités de huelga, el Gobierno finalmente cede a ello cuatro días antes de la convocatoria de una manifestación que se intuía que sería masiva. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no satisface a los comités de huelga (Guerrero, 2015).

El clímax de la protesta llegó con la multitudinaria movilización, que tuvo lugar el 29 de septiembre, bajo el lema “CONTRA LA IMPOSICIÓN, DEFENDAMOS

LA EDUCACIÓN”, en la que participaron alrededor de 100.000 personas. Se trata de una de las manifestaciones más masivas que se han producido en las Islas Baleares en las últimas décadas. Pasados unos días de esta movilización, se reúnen los docentes y deciden parar la huelga sin desconvocarla. Sin embargo, el 6 de octubre, las asociaciones de padres y madres de alumnos y los docentes advierten al Gobierno que mantendrán las protestas.

Desenlace: escenificación de la pacificación del conflicto y cambio de gobierno

En el periodo posterior al paro indefinido, los sindicatos STEI-i y ADIDE siguen apostando con éxito por la lucha en el campo jurídico. Al mismo tiempo, la Asamblea de Docentes adopta acciones que promueven la no-aprobación de las PGA, un repertorio de acción colectiva que introdujo la Plataforma Crida en los cursos anteriores. Estas acciones resultaron bastante exitosas (en el caso de la escuela pública, cerca del 70 % de los centros educativos las secundaron). Entre octubre y noviembre de 2013, se realizan dos convocatorias de huelga por parte de los sindicatos y la Asamblea de Docentes, que se unen a las acciones desarrolladas a nivel estatal contra la LOMCE. También se suceden múltiples concentraciones para protestar contra la implantación de la LOMCE y contra el TIL. Por otro lado, a finales de noviembre, la Plataforma Crida promueve nuevamente encierros en los centros (Guerrero, 2015).

En la etapa final de la legislatura, el Gobierno intenta mostrar un talante más dialogante, pero también romper la unidad de acción de los actores sociales y políticos que se oponen a la reforma. Para ello, negocia acuerdos parciales sobre la base de los intereses particulares de los diferentes actores. En algunas de las negociaciones se intenta excluir a los comités de huelga, aunque no fructifican en un acuerdo. Otras negociaciones, como las que se llevan a cabo con la patronal de los centros concertados, tienen éxito (Guerrero, 2015). Sin embargo, las relaciones entre Gobierno y partidos políticos en la oposición, sindicatos docentes y movimientos sociales seguirán siendo tensas hasta el final de la legislatura.

2 Como se conoce al territorio de Mallorca, predominantemente rural, que no pertenece a la ciudad de Palma.

En el inicio del curso 2014-2015, el Gobierno cesa a la consejera Camps debido a la anulación del Decreto TIL por parte del TSJIB. Nuevamente, la lucha jurídico-legal emprendida por los sindicatos docentes (junto a otros actores) tuvo un impacto sustantivo. El dictamen del Tribunal es tajante y hace imposible la aplicación del decreto. Quien tomará el relevo al mando de la Consejería de Educación será Núria Riera, quien hasta el momento era la titular de Administraciones Públicas y ejercía como portavoz del Gobierno (*La Vanguardia*, 26/09/2014). Con ella, el partido conservador trata de recuperar el diálogo con la comunidad educativa. La culminación del conflicto se produce en las elecciones autonómicas del 24 de mayo. En estas, el partido conservador pierde el gobierno y el 37,3 % de los votos respecto a los anteriores comicios. Por el contrario, hay una irrupción de fuerzas de izquierda, como MÉS y PODEMOS, que formarán una coalición que será liderada por el PSIB (*El Mundo*, 25/05/2015). El nuevo gobierno, con el objetivo de marcar distancia con el anterior, adoptó numerosas medidas en el ámbito educativo nada más comenzar la legislatura: derogó la Ley de símbolos, incrementó las plantillas de profesorado e inspección, así como otras partidas de recursos en educación, y redujo el tiempo de sustitución de los docentes. También se posicionó en contra de la implantación de la LOMCE en el territorio balear.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Durante la legislatura 2011-2015, el Partido Popular impulsó numerosos cambios en el sistema educativo de las Islas Baleares. Entre ellos, destacan la aplicación de severos recortes en la inversión pública y la reforma del modelo lingüístico de la escuela. A lo largo de este periodo, las relaciones entre el Gobierno y los actores sociales (sindicatos, movimientos sociales, etc.) se deterioraron y derivaron rápidamente hacia un «modelo de confrontación» (véase Verger, Fontdevila, y Zancajo, 2016). Las políticas educativas del gobierno conservador crearon condiciones de posibilidad para la emergencia de nuevos movimientos sociales. En las Islas Baleares, las políticas de austeridad sobre el

sector público habían generado protestas sociales sectoriales que, si bien servían para expresar el malestar social, habían tenido una escasa capacidad de movilización e incidencia política hasta el momento.

No obstante, la Asamblea de Docentes tuvo la capacidad de crear unos marcos resonantes y fue capaz de establecer puentes entre diferentes marcos de interpretación (*frame bridging*) (Snow et al., 1986). Ello resultó estratégico a la hora de aunar las luchas contra el TIL y la LOMCE, y la defensa de los servicios públicos en una movilización social unitaria y sin precedentes en la historia reciente de las Islas Baleares.

La educación es, por regla general, un tema *saliente* (Benford y Snow, 2000) para la población, con el que, de un modo u otro, todos los sectores sociales se pueden sentir interpelados. En el contexto del conflicto educativo analizado, tanto los docentes (en tanto que fuentes) como sus discursos (en tanto que contenidos) dotaron a la Asamblea de Docentes de una «sólida imagen pública» que reforzaba la fidelidad narrativa de su relato (véase Benford y Snow, 2000; Della Porta y Diani, 2011: 114). Otro factor clave para entender el éxito de las huelgas recayó en la estrategia de comunicación con la que se informó, persuadió y movilizó a la ciudadanía. La Asamblea de Docentes era consciente de que su existencia como movimiento social y la perduración de la conflictividad dependían de su presencia en los medios de comunicación de masas y en las redes sociales. Por esta razón, la Asamblea trabajó minuciosamente el aspecto comunicativo —antes, durante y después de la huelga indefinida.

El conflicto social tuvo su punto álgido con la convocatoria de una huelga indefinida sectorial, que estuvo acompañada por una movilización social masiva. El movimiento social consiguió un impacto procedimental, introduciendo sus demandas en el centro del debate político y en la agenda de todos los partidos de la oposición, pero también generando nuevos sujetos políticos e interlocutores en el campo educativo. Contribuyó también al desgaste del gobier-

no del Partido Popular balear, que se desmoronó en las elecciones autonómicas de 2015, y logró cambios sustantivos en las políticas públicas, entre los que destacan la derogación de la Ley de convivencia y la Ley de símbolos, la suspensión del proyecto de trilingüismo, el fin de los recortes y el aumento de recursos y de la dotación de personal docente.

El éxito de la movilización se debe a la confluencia de un amplio conjunto de factores. El movimiento social supo combinar repertorios de acción colectiva tradicionales con otros más disruptivos e innovadores (véase Tarrow, 2012; Verger, 2008). A pesar de los riesgos que conllevaba, la apuesta por la huelga indefinida en tanto que movilización, pero también como repertorio de acción movilizador y generador de redes, resultó clave. La capacidad de producción simbólica, una imagen pública sólida y la credibilidad de sus

discursos (véase Snow et al., 1986) permitió que las reivindicaciones docentes tuvieran un amplio apoyo social y aumentaran su capacidad de movilización. El hecho de que el Gobierno optara por aplicar las reformas por la fuerza, sin consenso ni negociación con los sindicatos y la asamblea de docentes, generó el efecto inverso de abrir la estructura de oportunidades políticas (véase Hay, 2002; Tarrow, 2012), ya que contribuyó a legitimar la protesta y a movilizar grupos sociales tradicionalmente más apáticos. Las sentencias judiciales en contra del TIL también tuvieron este efecto legitimador de la protesta y movilizador. De hecho, la combinación de acciones de calle y de acciones en el campo judicial, como las impulsadas por los sindicatos contra el Decreto TIL y las leyes de símbolos y de convivencia, fueron fundamentales para entender el impacto político y el calado social del ciclo de protesta analizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beach, D., y Pedersen, R. B. (2013). *Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Beamish, T. D., y Luebbers, A. J. (2009). Alliance building across social movements: Bridging difference in a peace and justice coalition. *Social Problems*, 56(4), 647-676.
- Benford, R. D., y Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611-639.
- Della Porta, D., y Diani, M. (2011). *Los movimientos sociales*. Madrid: Editorial Complutense, S. A. y CIS.
- Guerrero, M. (2015). *Els tentacles de les tenebres: un govern contra l'escola*. Palma: Leonard Muntaner.
- Hay, C. (2002). *Political Analysis. A critical introduction*. Nueva York: Palgrave.
- McAdam, D., McCarthy, J., y Zald, M. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Ediciones Istmo S. A.
- Melià, J. (2014). La movilización social por la lengua y la educación en las Baleares. *Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE)*, 7(3), 8.
- Moore, W. H. (1995). Rational rebels: overcoming the free-rider problem. *Political Research Quarterly*, 48(2), 417-454.
- Narodowski, M., Moschetti, M., y Alegre, S. (2016). Huelgas docentes y educación privada en Argentina. *Revista Colombiana de Educación*, 70, 27-45.
- Pastor, J. (2010). El Partido Popular y la anomalía española. *Viento Sur*, 111, 61-68.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Snow, D. A., y Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197-217.

- Snow, D. A., Rochford Jr., E. B., Worden, S. K., y Benford, R. D. (1986). Frame alignment processes, micromobilization, and movement participation. *American sociological review*, 464-481.
- Tarrow, S. (2012). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Verger, A. (2008). ¿Por qué tienen éxito (o fracasan) los movimientos sociales? Ejemplos de las campañas en defensa de la educación pública. En P. Polo, y A. Verger (coords.), *Educación, globalización y sindicalismo*. Palma: Escola de Formació en Mitjans Didàctics-STEI-i.
- Verger, A., Fontdevila, C., y Zancajo, A. (2016). *The privatization of education: A political economy of global education reform*. Teachers College Press.

WEBGRAFÍA

- Diario de Mallorca* (4 de septiembre de 2013). STEI y CCOO convocan huelga en educación sin apoyo de UGT y ANPE. Recuperado de <http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/09/03/stei-ccoo-registrarn-convocatoria-huelga/872124.html>
- El Mundo* (25 de mayo de 2015). Debate del PP en las Islas. Recuperado de <http://www.elmundo.es/baleares/2015/05/24/5561c3c622601d410c8b457b.html>
- Es Diari* (5 de septiembre de 2013). Enregistrada la convocatòria de vaga indefinida. Recuperado de <http://www.esdiari.com/enregistrada-la-convocatoria-de-vaga-indefinida/>
- La Vanguardia* (26 de septiembre de 2014). Cesa la consellera de Educación balear, Joana María Camps. Recuperado de <http://www.lavanguardia.com/politica/20140926/54415438881/cesa-consellera-educacion-balear-joana-maria-camps.html>
- Ste-i (9 de marzo de 2013). Enllaçats per la llengua. 9 de març. Recuperado de <http://stei.cat/transversals/index.php/normalitzacio-linguistica/3733-enllaats-per-la-llengua-9-de-mar>

NOTA BIOGRÁFICA

Lluís Parcerisa

Doctor en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualmente, es profesor lector del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona (UB) y miembro del grupo de investigación ESBRINA-Subjetividades, visualidades y entornos educativos contemporáneos (2017SGR 1248). Sus principales intereses de investigación incluyen la política educativa, la sociología política, la educación internacional y comparada, los efectos de las plataformas digitales sobre las desigualdades sociodigitales y los derechos de la infancia, la datificación y los estudios críticos de datos.

Antoni Verger

Catedrático de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador asociado a la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA). Con una formación interdisciplinaria en sociología y educación, su investigación examina procesos de reforma educativa desde una perspectiva comparada y global. En los últimos años, se ha especializado en el estudio de las reformas de privatización educativa, autonomía escolar y rendición de cuentas.

